

ÍNDICE AI: ASA 02/01/97/S
5 DE SEPTIEMBRE DE 1997

Japón y Corea del Norte: los gobiernos deben hacer pública la información sobre los secuestros

Con motivo de la reunión de los gobiernos japonés y norcoreano para gestionar las visitas a su país natal de las mujeres japonesas casadas con norcoreanos, Amnistía Internacional ha pedido a ambos gobiernos que no olviden otra importante cuestión humanitaria: la de los ciudadanos japoneses desaparecidos en las últimas décadas y sobre quienes existe la creencia generalizada de que fueron secuestrados y llevados por la fuerza a Corea del Norte.

«Los gobiernos de Japón y Corea del Norte, y también el de Corea del Sur, deben hacer pública toda la información de que dispongan sobre las afirmaciones de que al menos 10 ciudadanos japoneses han sido secuestrados y trasladados a Corea del Norte en los últimos 20 años», ha declarado hoy Amnistía Internacional.

«Estos gobiernos podrían estar reteniendo una información vital que deben revelar por el bien de las presuntas víctimas y sus familias».

Se cree que durante las décadas de 1970 y 1980, agentes norcoreanos secuestraron y llevaron a Corea del Norte al menos a 10 ciudadanos japoneses, incluida una niña de 13 años. No se ha hecho pública ninguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones, y parte de la información que existe al respecto procede de fuentes del contraespionaje surcoreano, muchas veces tendenciosas. Corea del Norte ha negado los hechos.

Durante muchos años, las relaciones entre Corea del Norte y Japón se han visto agriadas por estos presuntos secuestros y por la denegación de autorización a las esposas japonesas para regresar a su país natal. Entre 1959 y 1982, cientos de japonesas contrajeron matrimonio con norcoreanos y se trasladaron a Corea del Norte, cuyo gobierno les impide regresar a su país para visitar a sus familias. Después de que ambos gobiernos llegaran a un acuerdo en agosto, se prevé que las primeras visitas de esposas japonesas comiencen a finales de septiembre.

Amnistía Internacional no tiene acceso a información imparcial sobre los presuntos secuestros, y debido a las restricciones impuestas por el gobierno norcoreano, no ha podido realizar investigaciones independientes en el interior de Corea del Norte.